

La arquitectura política y los determinantes institucionales del desarrollo integrado de América del Sur

Premisas para pensar el Mercosur

Julio C. Gambina¹

Resumen

El Mercosur surgió como una institucionalidad neoliberal, producto de las políticas regresivas implementadas en los años 90' a lo largo de nuestro subcontinente americano. Por lo tanto, pensar en clave de "desarrollo integrado" presenta el desafío de cambiar la estrategia originaria del Mercosur; que continua pensando más en términos de competitividad individual, que de cooperación y solidaridad entre los pueblos americanos, en un escenario mundial dominado por las corporaciones transnacionales.

La situación actual de crisis de la economía capitalista mundial convoca a pensar en los desafíos regionales para consolidar el rumbo de cambio político, priorizando la construcción de subjetividad consciente para evitar retrocesos. Por tanto lo que sigue son premisas para pensar críticamente el Mercosur y delinear aspectos relativos a desafíos en el presente y el futuro.

Palabras clave: Integración; Mercosur; Capitalismo; Socialismo.

Abstract

Mercosur emerged as a neo-liberal institutionalism, the product of the regressive policies implemented in the 90 'over our American continent. Therefore, think about key "integrated development" presents the challenge of changing the original strategy of Mercosur; which continue to think more in terms of individual competitiveness that cooperation and solidarity among the peoples of the Americas, on a global stage dominated by transnational corporations.

The current crisis of the capitalist world economy calls for thinking about regional challenges to consolidate the direction of political change, giving priority to the construction of conscious subjectivity to avoid setbacks. So what follows are prerequisites for critical thinking and outline Mercosur challenges aspects of the present and the future.

Keywords: Integration; Mercosur; Capitalism; Socialism.

(1) Doutor em ciências sociais pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires e professor de economia política na Faculdade de Direito da Universidade Nacional de Rosário, Argentina.

Introducción

Se puede afirmar que el proyecto de integración regional es antiguo, y en todo caso, el antecedente fracasado más importante remite a la lucha por la primera independencia, hace ya 200 años. Es quizá ahora, otra vez, un momento propicio para pensar en términos de integración regional en el marco de condiciones soberanas, de gesta por una segunda independencia. Es una cuestión política y de organización económica de la vida cotidiana orientada a resolver la problemática “social” caracterizada por la inequidad en la apropiación del ingreso y la riqueza.

En ese sentido, es muy estimulante el debate que suscita la “arquitectura política” y los “determinantes institucionales”; sumada a la necesidad de articular ambas cuestiones con relación al “desarrollo integrado” de Sudamérica. Lo que sigue son premisas para pensar críticamente el Mercosur y comenzar a trazar los desafíos del presente y del futuro.

Es importante comenzar interrogándonos acerca de la especificidad que estas construcciones lingüísticas suponen, ya que de ella se derivan dos lecturas contrapuestas, entre muchas otras según sea el analista que lo enuncie, sus valores y propósitos.

Un razonamiento parte de pensar en la arquitectura política como instrumento de ajuste del cual derivan el desempleo y la inseguridad social, características de las sempiternas crisis del capitalismo mundial contemporáneo. Pero no sólo ello, sino su relación con los determinantes institucionales de la política regresiva y su consecuente legislación que, en los años 80’ y muy especialmente de los 90’, derivaron en políticas de flexibilización laboral, privatizaciones, apertura y liberalización económica. Éstos determinantes se configuraron en un entramado institucional funcional a las hegemónicas políticas neoliberales.

Claro que otro enfoque de análisis puede ser de orden alternativo y asumir la nueva arquitectura política derivada del cambio en curso que transcurre en esta primera década del Siglo XXI en buena parte de la región latinoamericana y caribeña. Desde esta perspectiva, se definen nuevos determinantes institucionales, tal el caso de la constitución de la UNASUR (Unión Naciones Suramericanas) y de las dificultades de Estados Unidos para imponer su política exterior, verificadas en la Vº cumbre presidencial de las Américas (Trinidad y Tobago, 2009) donde

se clausuró la injustificada exclusión de Cuba de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sendos enfoques en uno u otro sentido resultan importantes. Por un lado, considerando el avance acaecido en las últimas décadas de liberalización, transformada en institucionalidad global centrada en el libre comercio. Desde esta perspectiva resaltan los tratados comerciales, bi o multilaterales, establecidos para la defensa de las inversiones de las empresas transnacionales, lo que incluye también sus correspondientes salvaguardas institucionales globales que reivindican las demandas de “seguridad jurídica” del capital más concentrado, tal es el caso del CIADI (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones). De igual manera, las trabas estructurales se evidencian a la hora de instalar nuevas instituciones, como ocurre con las demoras en el funcionamiento del Banco del Sur, o la aceptación como socio pleno de Venezuela en el Mercosur.

Por otro lado, existe la nueva arquitectura política del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) que, desde otro enfoque, sostiene una concepción alternativa de integración basada en principios como la solidaridad, la cooperación genuina y la complementariedad entre los países miembros (Bolivia, Venezuela, Ecuador, Cuba, Nicaragua, Honduras, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas y Mancomunidad de Dominica). Esta nueva institucionalidad trae consigo a los Tratados de Comercio los Pueblos (TCP) y a las empresas grannacionales que orientan las potencialidades de la integración comercial hacia el desarrollo y el bienestar de los pueblos.

Resulta imperioso considerar la situación actual incorporando un análisis dialéctico de la temática, dejando de lado la visión fragmentada que se nos quiere imponer. Se trata de retomar un enfoque integrado de economía y política que no sólo considere variables macroeconómicas, sino también - y sobre todo - la capacidad de acción colectiva para definir rumbos de desarrollo social. Es preciso recuperar una tradición histórica de la Economía Política en el marco de un sistema mundial en expansión y crisis, lo que supone incluir la perspectiva de conflicto y disenso al interior de las sociedades para pensar así, en los ulteriores desarrollos. Ello admite la discusión y reconceptualización de la categoría “desarrollo” o “desarrollo integrado”, difundida en los 60’ y 70’, en un escenario como el actual donde atravesamos una crisis sistémica, integral, de tipo civilizatoria, que

engloba el problema alimentario, energético, climático, financiero, económico, productivo.

Pretendemos enfatizar que junto al diagnóstico de crisis existen intervenciones sociales para avanzar en sentidos disimiles, según los sujetos intervinientes. Por esa razón es que se piensa a la crisis como una oportunidad de sentidos contradictorios. Entre los dominantes, por quien ejerce la hegemonía, y en otro sentido, los dominantes contra los dominados para afirmar el rumbo capitalista, alegando la necesidad de mantener el “orden” y promoviendo meras reformas cosméticas para restablecer el ciclo de producción, distribución, circulación y consumo de bienes, servicios y capitales. Por su parte, la oportunidad para los dominados pasa por obstaculizar la acumulación, disputar condiciones de vida y para intentar un tránsito del capitalismo hacia un nuevo orden, anticapitalista, socialista. En este proceso se realiza la dialéctica entre reforma y revolución.

Nuestros países son parte de este orden en crisis con tendencia creciente a la mundialización, ya que integran ámbitos de promoción por la liberalización, caso de la Organización Mundial de Comercio (OMC) creada en 1995. Paralelamente opera una institucionalidad originada más recientemente para inducir respuestas globales a la crisis emergente en los principales países capitalistas, tal el caso del Grupo de los 20 (G20). Especialmente cuando sus resoluciones son tendientes a restablecer el papel del FMI (Fondo Monetario Internacional) como ente ordenador y rector del sistema financiero mundial, cuya escasa capacidad para generar rectificaciones serias e importantes sobre la forma de funcionamiento del mercado mundial de capitales y el libre movimiento de capitales quedó recientemente evidenciado. Son condiciones que favorecen la especulación, los negocios ilegales y variadas formas de promoción del capitalismo criminal (compra venta de personas, armas, drogas, etc.).

Lo cierto es que también se puede pensar en “otro mundo posible”, imaginado desde los variados procesos de cambio político regional. Ello supone un debate sobre nuevos imaginarios de la arquitectura del poder en el ámbito nacional y en la perspectiva regional, especialmente en tiempos de bicentenarios. Implica también recuperar una dimensión “nuestramericana” (en términos de José Martí y luego de José Carlos Mariátegui) para pensar los determinantes institucionales, que encorsetan a su vez un proceso de integración, que requiere ser encarado con audacia y voluntad política para ensayar nuevos horizontes para América Latina y el Caribe.

La integración regional desde una perspectiva histórica. Interrogantes

Es en ese marco que debe pensarse el Mercosur, una institución surgida en el auge de las políticas de liberalización, con voluntad de los integrantes originarios por ser parte de la dinámica de construcción del nuevo orden mundial a la caída del sistema bipolar. Han pasado dos décadas desde entonces, con experiencias muy diversas de resistencias a las políticas de las clases dominantes y que explican la base material de los cambios de gobierno, las reformas constitucionales y los nuevos desafíos para pensar críticamente nuestra realidad. La institucionalidad Mercosur es ya distinta de la originaria, pero bien vale interrogarse sobre la magnitud de la diferencia y si es está en concordancia con la demanda colectiva por transformaciones sociales profundas. Para ello proponemos hacer un poco de historia de este bloque regional.

En nuestra hipótesis, el Mercosur es el modelo que se impuso en los 90'. Es el modelo de "integración" acorde con la corriente principal del pensamiento económico en el sistema mundial y con las políticas económicas hegemónicas, cuyo programa más nítido se presentaba para 1990 en el Consenso de Washington.

Surgido en 1991 con el Tratado de Asunción (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay), hoy es un proyecto, que se vincula a otros actores de la región (Bolivia, Chile, Venezuela, México, Cuba, Ecuador, Perú, Colombia) con un claro objetivo: la promoción de la liberalización comercial y la promoción de las inversiones. Realidades tan distintas en cada uno de esos países o regiones nos hacen pensar que el Mercosur encierra fuertes tensiones entre sus postulados originarios y nuevos rumbos que le son propuestos por nuevos actores que se involucran en su desarrollo y en la gestión de los gobiernos nacionales que integran el bloque regional. Lo que sostenemos es que contemporáneamente, todos los protocolos de integración vigentes en Latinoamérica asumieron el espíritu neoliberal del Mercosur, fiel producto de los comienzos de los 90'. Constituyen determinantes institucionales de una arquitectura política que propugna la mercantilización de las relaciones sociales.

Es por eso que pensar en "desarrollo integrado" de nuestra región supone invariablemente analizar las estructuras ya existentes (Mercosur), promover su relanzamiento y profundizar los proyectos más recientes, aún restringidos a la esfera de la política, como la UNASUR.

Estamos en ese proceso de cambios en la región, con tensión entre los discursos críticos a los dominantes en los 90', y unas políticas de continuidad esencial en el paradigma de organización económica de la sociedad y el Estado. La sensación es que todo está en discusión. En abril del 2001, cuando se realizaba la tercera cumbre de presidentes americanos en Quebec, pocos discutían el ALCA (Área de Libre Comercio para las Américas). De hecho, salvo Venezuela, todos los mandatarios suscribieron el acuerdo para lanzar el proyecto en el 2005. Hugo Chávez, en la presidencia venezolana desde 1999, había planteado la posibilidad de construir una alternativa, definida como ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. En aquel tiempo, el ALCA aparecía como una realidad y el ALBA como una quimera. Han pasado los años y la situación cambió. La quimera hoy es el ALCA, porque el Mercosur hizo suyos los reclamos de los pueblos latinoamericanos y rechazó se incluyera como tema de la agenda en la cumbre de presidentes realizada en noviembre de 2005 en la ciudad de Mar del Plata. Fue el final de una iniciativa estratégica de las clases dominantes en la región motorizada por EEUU y la complacencia de los gobiernos de la región en los 90'. Ese momento constituyó un punto de quiebre en la política de integración dando lugar a un reacomodamiento de la arquitectura política a partir del surgimiento de proyectos como el ALBA o UNASUR.

A pesar de ello no hay que dejar de lado que Estado Unidos sigue siendo el principal escollo para pensar en términos de integración regional alternativa. Es que este país avanza con acuerdos bilaterales en pos del objetivo de la liberalización. Pero convengamos que Estados Unidos no actúa solo y que permanentemente se emiten señales desde los gobiernos de la región para acercarse a negociaciones bilaterales, afectando así las posibilidades de avance en una negociación propia de América Latina y el Caribe para el establecimiento de una región económica con perfil autónomo de inserción mundial. Chile suscribió el TLC con Estados Unidos y Uruguay alude en forma sistemática a la posibilidad de negociar individualmente un acuerdo con el país del norte.

Lo que pretendemos destacar es la potencialidad de la integración regional, pero atravesada por una doble tensión: la que proviene de la definición del rumbo económico y social de los procesos de cambio en América Latina y el Caribe y la que ejerce Estados Unidos y el poder local para mantener sus posiciones de dominación sobre nuestra región en la disputa global por el orden mundial.

Quizá, el principal problema sea que el Mercosur es un “Instituto” producto de otra época, la del 90’. El espíritu del Tratado de Asunción (1991) y todos los protocolos de actualización posterior, especialmente en Ouro Preto (1994) tenían la impronta de favorecer la iniciativa privada, la orientación al mercado y la liberalización del comercio, las inversiones y el libre flujo de los capitales.

Lo que pretendemos suscitar es la tensión generada entre “socios” que formulan sus objetivos de manera tan disímil. Es cierto que difícilmente se pueda calificar a Venezuela de “socialista”, o a la Argentina de un modelo de “capitalismo nacional”, especialmente en la época de la dominación transnacional, de la cuál Argentina da perfecta cuenta por el peso de las CTN en la cúpula empresaria. Pero más allá de las realidades estructurales de la organización económica de cada país, nos interesa poner en discusión el rumbo de los discursos y de las políticas económicas en ALC. ¿Qué rumbo para la región? ¿Se puede ir contra la recreación recurrente del capitalismo? La recreación capitalista es un proceso verificable luego de cada crisis capitalista, en los 30’ y en los 70’, como en los recientes 90’. ¿Es posible pensar y actuar en términos alternativos e incluso socialistas? Debemos reconocer que se trata de un debate excluido en los últimos 30 años, por lo menos con visibilidad en el conjunto de la sociedad, o por lo menos de una parte considerable. No en vano ante la crisis de los 70’, la respuesta fue en el Sur del continente americano el terrorismo de Estado para reconducir el desarrollo regional según las demandas y necesidades del capital más concentrado y en detrimento de los trabajadores (Bayer, et. al 2010). Es una cuestión de orientación y rumbo para avanzar en el desarrollo económico y social.

Cambio de discurso, ¿cambio de institucionalidad?

Entre las tendencias predominantes de nueva arquitectura política que existen en América Latina y el Caribe, se constata una crítica creciente al neoliberalismo, que en ocasiones esconde la continuidad por otros medios de la política neoliberal, es decir, de los determinantes institucionales. Apuntamos a señalar que se critican las políticas neoliberales pero se mantienen las reformas estructurales planteadas en los años 80’ y 90’, a saber: apertura comercial, libre circulación de capitales, flexibilización laboral, ajuste estructural, entre otros. La “institucionalidad” se impone y constriñe la “arquitectura política” del cambio

y una renovada concepción del “desarrollo” que modifique la ecuación de “beneficiados y perjudicados” aun existente desde los años 90’.

Lo dicho no significa desconocer los intentos que en este tiempo histórico se vienen llevando a cabo en pos de superar aquellas reformas estructurales - devenidas en determinantes institucionales - que sufren los pueblos de la región. Digamos en este sentido que hay una fuerte expectativa en las experiencias latinoamericanas y que, en general, cuando se alude al tema, se hace referencia casi exclusivamente a los cambios de gobierno. Al respecto quiero sostener un matiz en tres dimensiones:

a) los gobiernos que expresan condiciones de cambio político son productos de una acumulación de lucha popular previa. Por lo tanto, lo que interesa es la dinámica popular resistente y condicionante de esos propios gobiernos y no tanto aquella que los gobiernos pretendan llevar adelante;

b) en rigor, hay que observar la dialéctica existente entre los movimientos populares de nuestra región (más allá de la visibilidad que tengan en cada momento histórico) y el accionar de cada uno de los gobiernos;

c) más allá de esta dialéctica, no se debe soslayar que ambos, tanto las administraciones gubernamentales como las dinámicas de resistencia de los movimientos populares de la región, son foco de una política de cooptación llevada adelante por las clases dominantes a los efectos de darle continuidad a las políticas de reforma estructural planteadas en las décadas anteriores.

Las clases dominantes y otros actores sociales que bregan por la “institucionalidad neoliberal”, se resisten a abandonar su carácter protagónico en la arquitectura política que define el rumbo del desarrollo en nuestros territorios. Es importante destacar que lo que predomina actualmente en América Latina, especialmente en el Cono Sur, es un cambio en el discurso político e ideológico. Sin embargo tal transformación no se materializa en modificaciones esenciales de aquellas políticas y estructuras socioeconómicas que impusieron una distribución negativa del ingreso que perjudica a la mayoría de la población. No asistimos aún a una correspondencia plena entre el nivel discursivo y el fáctico. Es por ello que al momento de hacer un balance del Mercosur como proyecto de integración, no deben soslayarse todos los aspectos antes mencionados.

Asimismo es preciso interrogarnos acerca de quiénes son los que se benefician con la integración regional y cuál debiera constituir el *paradigma de*

la nueva organicidad institucional de esa integración. A modo de ejemplo se trata de pensar en la recurrente insatisfacción de Uruguay y Paraguay, respecto de las asimetrías respecto de Argentina y Brasil.

Lo señalado con relación al Mercosur puede pensarse al interior de cada uno de los países. Cuando se mide el crecimiento económico, hay que interrogarse sobre quienes se favorecen. No alcanza obviamente con propugnar la transición de un capitalismo financiero a otro de índole productivo, ya que más allá de las definiciones a nivel conceptual, existe verdaderamente una integralidad de las clases dominantes en materia financiera y productiva.

El paradigma de la dominación actual en el capitalismo supone la subsunción del trabajo, la naturaleza y la sociedad en el capital, sea bajo su forma financiera o productiva. Una de las asignaturas pendientes en Nuestramérica es transitar de la crítica discursiva al neoliberalismo, al establecimiento de políticas económicas que resuelvan las necesidades de nuestros pueblos. La tesis que sustentamos es que la nueva arquitectura política en la región está siendo obstaculizada por determinantes estructurales de una institucionalidad gestada en las últimas décadas del Siglo XX, ya que si bien la crítica supone un avance, presenta límites que de no ser trascendidos puede conducir a un retroceso de la situación política.

Sujetos de poder: capital y Estado

Discutir el rumbo político de nuestros países supone discutir la institucionalidad del Estado y del mercado. ¿Quiénes firmaron y negocian los Tratados de Libre Comercio sino nuestros propios Estados? ¿Quiénes han firmado los Tratados Bilaterales de Inversión sino nuestros propios Estados? ¿Quiénes se benefician y sostienen esos acuerdos? ¿Están los Estados más allá de la organización del/los mercados? En principio es necesario dejar en claro que con ambas categorías (Estado y mercado) estamos aludiendo al capitalismo, ya que como está dado el escenario hablamos de un “mercado” y un “Estado” capitalista.

Es así que, a primera vista, reconocemos como sujeto principal de la construcción capitalista de nuestro tiempo al capital transnacional cuya estrategia de liberalización sólo puede ser materializada con la colaboración del estado. Éste resulta un producto histórico del modo de producción capitalista, que garantiza

la sustentabilidad del ciclo económico, recuperando la función de valorización capitalista en la producción y reproducción del capital. Desde nuestra concepción no existe una diferenciación categórica entre Estado y capital, ambos constituyen una relación social (que admiten la disputa a su interior); al tiempo que son categorías históricas que poseen una función específica. El rol del Estado históricamente (en el capitalismo), es estar al servicio del capital, determinado en última instancia por éste. Lo es hoy, en tiempos ideológicos de liberalización, pero también lo ha sido en tiempos ideológicos, políticos y culturales de fuerte intervención estatal en la economía, en la política y en la sociedad. Empero, es preciso considerar la “autonomía relativa” del estado respecto del capital, dado que el primero condensa, en su seno, la lucha de clases, por tanto la política estatal no resulta monolítica, sino que es producto de las contradicciones de clases inscriptas en su interior (Poulantzas, 1991), del mismo modo que la relación capital contiene la confrontación de los trabajadores. De ahí deviene la necesidad de profundizar en el conocimiento de un actor sustancial en el marco de la discusión del orden vigente: el Estado-Nación y su papel en la coyuntura de crisis, especialmente ante la evidente intervención estatal en la coyuntura actual de crisis y llevada adelante por los mismos ideólogos del libre mercado.

Siendo el capital el sujeto principal, le resulta indispensable contar con la colaboración de los Estados nacionales, que con su accionar aseguran el objetivo de la valorización del capital, la dominación y continuidad del orden capitalista. Nada de lo que ocurre en las relaciones entre capitalistas y trabajadores sucede sin el accionar concreto de los Estados. Es una afirmación válida en las mutaciones de las relaciones en el ámbito de las empresas (relación entre el capital y el trabajo), como en el conjunto social (relaciones mediadas por el Estado y entre los Estados). Sin el Estado y sus medios represivos no se puede entender el disciplinamiento del movimiento de trabajadores en cada uno de los países y a escala global. Lamentablemente el histórico sojuzgamiento del mundo del trabajo trasciende las resistencias particulares y parciales conquistas de determinados trabajadores en alguna parte del planeta. Es dable añadir que las formas de la violencia no remiten sólo al uso de las armas y la represión física, sino que también se acude a la violencia moral del chantaje y a la manipulación de la conciencia social para naturalizar el orden vigente y las nuevas formas que asume la explotación. Así como también debe consignarse el accionar propagandístico a través de los

aparatos ideológicos del Estado que se ocupan de naturalizar las demandas del capital en el conjunto de la sociedad (Althusser, 1970).

Contrario a lo que algunos sostienen, actualmente no hay “menos” Estado que en tiempos previos de la hegemonía neoliberal, sino que transitamos un cambio de funciones de los estados nacionales, apoyado en cuatro décadas con el proceso de liberalización de la economía mundial. Insistimos entonces que no resulta adecuado contraponer al “mercado” con el “Estado”, como si fueran tendencias contrarias, y a esta idea - por cierto muy extendida en cierto pensamiento crítico al modelo neoliberal - que asume un supuesto progresismo del Estado y el carácter regresivo del mercado. Estas nociones conllevan, a su vez, dos mitos: el primero referido a que el Estado no debía intervenir en la economía y el segundo que la participación del Estado en la economía es siempre progresista. Evidentemente esto último no es así ya que los estados también responden a intereses y, por lo tanto en el marco del sistema capitalista, el Estado interviene para sostener el régimen, defendiendo a las empresas transnacionales, tal como se manifiesta en el salvataje empresario de estos años de crisis.

Insistimos, ambas categorías (mercado y estado) implican relaciones sociales y como tales son contradictorios y expresan determinados intereses, de “clase” en el sistema capitalista. En el mercado se define la contradicción y confrontación entre el capital y el trabajo, tanto como la lucha competitiva o monopolista entre capitales de diferente composición orgánica (Marx, 2000). Es el ámbito de disputa por la apropiación de la renta. Mientras que es el propio Estado quien propone y conduce la mercantilización capitalista de la sociedad, o un proceso de socialización de la producción y su distribución. El Estado resulta imprescindible para canalizar con éxito la ofensiva global del capital, o su contrario, la emancipación social. Por eso vale insistir en nuestra tesis original. No se trata de seguir el curso de la historia tal y como viene, con condicionantes “objetivos”. Existe la posibilidad de actuar sobre la historia y ello supone el accionar de los pueblos.

Rumbos para el desarrollo regional

Los cambios políticos en la región suponen un viraje hacia la izquierda en la construcción de la arquitectura política. Luego de 35 años se vuelve a hablar de independencia nacional, de desarrollo integrado, de integración alternativa,

e incluso de socialismo, con matices, tales como el “socialismo del Siglo XXI” venezolano, o el “socialismo comunitario” boliviano, pero socialismo al fin, tal como definió desde 1961 Cuba. Es que el terrorismo de Estado acaecido a mediados de la década del 70’ en la región, se gestó deliberadamente en pos de obstruir el proceso de democratización por la liberación social y nacional llevado adelante en gran parte de Latinoamérica desde la perspectiva de un desarrollo integral (60’ y 70’)

Es importante destacar el giro a la izquierda en la región, que instala, incluso, discursos de temor a un “contragolpe” desde la “derecha” (Gambina, 2010). Una cosa es la respuesta de izquierda a la hegemonía, situación manifiesta en algunos procesos regionales, especialmente en Venezuela, Bolivia y Ecuador, que sugieren cambios estructurales, incluso anticapitalistas y pro socialistas, mas otra muy distinta es suponer que discursos críticos a la hegemonía de los años 90’ impliquen reformas estructurales a la institucionalidad neoliberal vigente en nuestros países. Las clases dominantes disputan el gobierno de una institucionalidad por ellas creada entre los años 80’ y 90’, la cual se sostiene esencialmente en nuestro tiempo.

Lo que se debate en la región es el rumbo, el tipo de desarrollo. Algunos sostienen la posibilidad y espacio para la construcción del capitalismo autónomo del proceso de transnacionalización, para lo cual recuperan tanto el discurso y como las prácticas sociales (institucionalidad) propias de la evolución social vivida entre comienzos del Siglo XX y la crisis de los 70’. Esta postura se evidencia en las definiciones de políticas de varios de los países en nuestro territorio. Puede definirse ese rumbo como “neodesarrollista”. Otros sostienen que el capitalismo no ofrece soluciones a la región, y por lo tanto, es imperioso organizar la construcción de un tránsito desde el capitalismo hacia el socialismo. Un socialismo que requiere ser nuevamente definido en función de las anteriores experiencias, con sus éxitos y fracasos. Ambas concepciones suponen diferentes nociones de desarrollo, las que obstaculizan una idea común de construcción de arquitectura política con determinantes institucionales compartidos.

No es lo mismo decir que lo que se pretende es reconstruir el capitalismo de un país, que señalar que lo que se quiere construir es el socialismo, con el adjetivo que se quiera adicionar en ambos casos. Es que el debate entre el modo de producción capitalista y socialista vuelve a insinuarse, bajo nuevas formas a las

asumidas en los años 60' y 70'. Son determinantes institucionales diversos, pues suponen el énfasis contradictorio entre la valorización del capital y la satisfacción de las necesidades sociales.

Modelo productivo, sujetos y democratización social

Si se discute el tema del desarrollo, bien vale interrogarse sobre la infraestructura y el modelo de desarrollo en el Mercosur. La pregunta es: ¿para quién queremos el gas? ¿Para quién queremos el petróleo? ¿Qué hacer con el agua ó la biodiversidad? ¿Para quién queremos las rutas, la hidrovía o cualquier desarrollo para el transporte? ¿La queremos para seguir desarrollando el ciclo de negocio de los capitales transnacionales o queremos esa infraestructura para resolver las necesidades populares de nuestros pueblos? ¿Cuál es la tecnología que tenemos que desarrollar? ¿Cuáles son los instrumentos que tenemos que poner para que el mercado esté al servicio de las necesidades populares? ¿Qué productos a desarrollar y para quién? ¿Qué patrón de producción y de consumo, por ende de distribución y cambio?

Éstos no son sólo temas económicos o comerciales, de inversiones, tecnológicos, sino que el desarrollo supone el abordaje de cuestiones políticas, ideológicas, militares, culturales, en tanto diferentes dimensiones a las que debe acudir para pensar la economía política contemporánea. Esta integralidad resulta imprescindible para establecer determinantes institucionales que aseguren una nueva arquitectura política de cambio en la región. Entre otras cuestiones resulta cuestionable la ausencia de hipótesis compartida de conflicto y la definición de una política conjunta de defensa ante las posibilidades de ataques nucleares, tal como denuncia fundadamente Fidel Castro en sus últimas reflexiones. Es discutible la misión militar conjunta en Haití sin definir una estrategia común de defensa ante el conflicto mundial.

El desarrollo integrado requiere asumir la constitución de un sujeto social y político para sustentar la transformación, así como hay un sujeto de la transnacionalización o de la integración subordinada, las corporaciones transnacionales, los Estados y los organismos internacionales. Todos ellos en su conjunto constituyen los sujetos de la dominación, los sujetos de la transnacionalización. El desafío es la constitución de sujetos por un rumbo diferente, en la búsqueda de alternativas que afirmen la nueva arquitectura política

del cambio y construyan otros determinantes institucionales para un desarrollo integrado.

El modelo de desarrollo en discusión supone habilitar una discusión sobre la democracia y sus alcances, en sus dimensiones electivas, participativas y comunitarias. Son nuevos escenarios que no sólo se manifiestan en sólidas instituciones estatales, sino incluso en el ámbito de la cultura social o la conciencia del colectivo constituido en sujeto para el cambio. Existe un gran debate sobre lo democrático, con insuficientes instrumentos conceptuales para pensar el tema más allá de la democracia representativa y los sistemas electorales, en general asociando capitalismo y democracia.

En la discusión sobre el desarrollo hay que intentar ir más allá de lo económico y definir políticas de articulación productiva más allá de las señales del mercado mundial definido por las transnacionales y su paquete tecnológico. Ello supone repensar la estrategia científica, técnica, tecnológica y educativa compartida de la región. Es cierto que hay avances y reuniones que dan cuenta de los intentos de articular lo diverso en la región, pero resulta imprescindible estimular la constitución de redes de investigación sobre temas prioritarios y urgentes para un desarrollo autónomo e integrado. Es válido el razonamiento que apunta a la vinculación de variadas instituciones (universidades públicas, entes estatales de promoción productiva, asistencia técnica y financiamiento) para inducir proyectos compartidos para el desarrollo.

El modelo de desarrollo integrado es un desafío para superar la estrategia inicial de la constitución del Mercosur, tanto si se la piensa como institucionalidad neoliberal, como si se sustenta una tesis de articulación defensiva en el momento que emergían bloques globales orientados por las principales potencias capitalistas, especialmente en el norte de América y en la Europa Unida, como expresión de la disputa entre el dólar y el euro. El Mercosur creció en múltiples acuerdos y con variada institucionalización de países de la región vinculados a una estrategia de integración, incluyendo países que privilegian otros foros y formas de articulación económica, p.e., vía tratados de libre comercio, el G20. Ya mencionamos que la prueba de fuego la atravesó el Mercosur en la cumbre marplatense del 2005, cuando se cerró el camino para el debate sobre el ALCA. Desde entonces, la discusión sobre la integración se ha potenciado en diversas iniciativas, no siempre complementarias ni acabadas, sobre las cuales aún

no está establecido un diagnóstico definitivo, caso de UNASUR, del ALBA y sus novedosos instrumentos, especialmente el S.U.C.RE (Sistema Unitario de Compensación Regional) e incluso el sistema Múltiple de Pagos entre Argentina y Brasil.

Claro que los límites del Mercosur están dados por las políticas económicas que se siguen al interior de los países miembros, donde se sigue pensando más en términos de competitividad individual (nacional), en un escenario mundial dominado por las corporaciones transnacionales, que en un modelo de desarrollo integrado. A sólo modo de ejemplo se puede pensar en el reciente “Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní”, suscripto el 2 de agosto de 2010 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en la Cumbre realizada en San Juan. La lógica del articulado de 22 puntos potencia a las “partes” y sus derechos, más que pensar en términos de región y conjunto articulado. Resulta imprescindible pasar de una concepción de políticas nacionales a una convergencia de carácter regional, lo que supone claro está, un profundo debate sobre el rumbo a compartir.

Banco del Sur. ¿Existen recursos para sostener un proyecto emancipador y autosustentable?

Existen luces y sombras en las propuestas de integración, es así como aparecen conflictos, dudas y esperanzas en torno a los diversos proyectos. En ese sentido el Banco del Sur surge como un instrumento financiero alternativo al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, encargado de viabilizar los tratados internacionales relativos a los derechos humanos, sociales y culturales. Según el especialista Eric Toussaint:

el Banco del Sur tendría como objetivos, en particular, romper la dependencia de los países periféricos del mercado financiero internacional, canalizar la capacidad propia de ahorro, detener la fuga de capitales, canalizar los recursos centrales a las prioridades de un desarrollo económico y social independiente, cambiar las prioridades de inversión, etc. Se trataría de un banco público alternativo al Banco Mundial y a los bancos regionales de desarrollo, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Asiático de Desarrollo” (Toussaint; 2008, p. 40).

De ahí sus expectativas e incertidumbres.

El 9 de diciembre de 2007 se suscribió en Buenos Aires el acta fundacional del Banco del Sur. Fueron de la partida siete países: Argentina, Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Ecuador y se espera que otros países de la región se incorporen en el trayecto de su desarrollo. La idea original provino desde Caracas y fue asumida por Néstor Kirchner. Por ello no sorprende que el acta fundacional fuera suscripta el último día de su gestión al frente del gobierno argentino, aprovechando la presencia del resto de los mandatarios en Buenos Aires que asistían al recambio presidencial.

Paralelamente Hugo Chávez imaginó un conjunto de iniciativas para la integración económica y cultural para América Latina y el Caribe que son parte de un proyecto de desarrollo alternativo en la región, basado en los proyectos “grannacionales”. Éstos surgen como la materialización de los procesos de integración social y económica entre los países de la región. Algunos de los cuales ya se encuentran en funcionamiento con distinta suerte. Entre otras existe Telesur, un proyecto comunicacional que no encuentra acompañamiento efectivo entre los socios en la región, pero que intenta consolidarse. Petroamérica, que posee un importante desarrollo en la zona caribeña, aunque existen algunos emprendimientos comunes entre la petrolera de Venezuela y empresas de algunos países en la región como ser Brasil, Bolivia, Argentina y Uruguay. El proyecto ALBA-med, lanzado en mayo de 2009, es un impulso “grannacional” en pos de regular los medicamentos de los países miembros, así como generar un registro sanitario único del ALBA, todo ello, bajo la supervisión de instituciones cubanas especializadas.

En ese marco surgió la idea de organizar un banco de desarrollo, un fondo monetario regional y un uso compartido de recursos financieros esterilizados en la banca transnacional. Las reservas internacionales de América Latina y el Caribe supera los 500.000 millones de dólares y la de los siete países involucrados en el Banco del Sur se encuentran por encima de los 300.000 millones de dólares. Una parte importante de esos fondos está invertido en activos externos del capitalismo desarrollado, muchas veces depositada en la banca transnacional y tienen destino en la acumulación capitalista global y sus nefastas consecuencias sobre la calidad de vida de la población mundial. Se apunta a la utilización de esos recursos para un financiamiento alternativo. Es un hecho que los ahorros en el sur financian al norte desarrollado, acumulando miserias y luego se demandan

inversiones y créditos desde el mundo capitalista desarrollado que no hacen más que profundizar la dependencia y la explotación. El sur está financiando al norte fuertemente endeudado, que intenta transferir el costo sobre la base de mayores penurias para los pueblos del mundo.

Las expectativas en las posibilidades de una nueva arquitectura financiera de la región son importantes. En el movimiento popular existen fundados temores que se manifestaron en una carta emitida por variados movimientos y redes y que fuera entregada a los mandatarios que suscribieron el acta de fundación del Banco del Sur. Este recelo, no impide una mirada esperanzadora en la propuesta del financiamiento autónomo. El tema es la organización de la subjetividad popular para disputar poder popular y por ello, los actores intervinientes en este escenario son las empresas transnacionales, los Estados capitalistas (incluyendo los latinoamericanos) por un lado, y por el otro, los pueblos. En nuestra hipótesis favorables a los cambios queremos insistir que son los pueblos son los que tienen que impulsar las iniciativas para que se consoliden los cambios institucionales hacia una transformación social.

Los desafíos del presente y el futuro

La situación de crisis de la economía capitalista mundial convoca a pensar en los desafíos regionales para consolidar el rumbo de cambio político, colocando en primer lugar la construcción de subjetividad consciente para evitar retrocesos.

Desde esa subjetividad consciente se debe impulsar el cambio institucional para obstaculizar el accionar estructural de aquellos que piensan en restablecer hegemonía política a unas instituciones establecidas en el “orden neoliberal”, especialmente constituido en los años 90. Existen un conjunto de nueva instituciones desarrolladas en estos años que inducen a ese camino alternativo, pero requieren potenciar su contacto con los pueblos de los países para constituirse en institucionalidad del soberano, del pueblo.

Pretendemos apuntar a la constitución de sujeto *en el* Estado y en la disputa del mismo, pero también *más allá* del Estado, y por eso el sujeto se construye también en las iniciativas socioeconómicas que impulsa el movimiento popular, en ocasiones con el apoyo del Estado y en otras, con éste como contrapeso. La construcción de alternativa a que alude esta reflexión se concentra

en la constitución de sujetos conscientes para asumir los desafíos de una época y un territorio. Aludimos a América del Sur pero también a Centroamérica y el Caribe en un momento en que se habilitan expectativas de cambio, las que sólo se materializarán si avanza la construcción de un imaginario popular generalizado, que pueda constituirse en una práctica de producción y reproducción de la vida bajo paradigmas que excluyan la dinámica de la explotación humana. Ello supone una articulación de ideas y de sujetos que disputen contra el poder económico, ideológico, político y militar actuante en cada país, región y en el ámbito mundial. Eso hace imprescindible la articulación de bloques históricos para la transformación institucional con capacidad de ofrecer respuestas creativas a la crisis. Ambas cuestiones, la constitución de subjetividad consciente para mantener el rumbo de cambio político y la modificación institucional articulada con el movimiento popular y la sociedad, son premisas insustituibles para disputar un nuevo sentido común para el desarrollo integrado de Nuestra América.

Bibliografía

ACTA Acuerdo Acuífero Guaraní; San Juan. En línea en: www.mercosur.int. Consultado: 17 Nov. 2010.

ALTHUSSER, Louis. *Ideología y aparatos ideológicos del Estado, Freud y Lacan*. Buenos Aires: Editorial Nueva Visión, 1970.

BAYER, Osvaldo; BORON Atilio; GAMBINA, Julio. *El terrorismo de Estado en la Argentina*. Apuntes sobre su historia y sus consecuencias. Buenos Aires: Instituto Espacio para la Memoria, 2010.

BORON, Atilio. *Socialismo siglo XXI. ¿Hay vida después del neoliberalismo?* Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2008.

GAMBINA, Julio. ¿Punto de inflexión política? ¿Evo o Piñera?”. 2010. En línea en: <http://juliogambina.blogspot.com/2010/02/punto-de-inflexion-politica-evo-o.html>. Consulta: 17 Nov. 2010.

MARIÁTEGUI, José Carlos. *Obras*. La Habana, Cuba: Casa de las Américas, 1982. Tomos I y II.

MARX, Carlos. *El Capital*. México: Fondo de Cultura Económica, 2000.

POULANTZAS, Nicos. *Estado, poder y socialismo*. México: Siglo XXI, 1991.

SADER Emir. *El nuevo Topo, los caminos de la izquierda latinoamericana*. Buenos Aires: Coedición Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO y Siglo XXI Editores, 2009.

TOUSSAINT, Eric. *Banco del Sur y la nueva crisis internacional*. Quito: Ediciones Abya-Yala, 2008.

WILLIAMSON, John. *What Washington means by policy reform*. Latin American Adjustment. How Much has Happened? Institute for International Economics, 1990. En línea en: <http://www.iie.com/publications/papers/paper.cfm?ResearchID=486>. Consulta: 17 Nov. 2010.

_____. *A short history of the Washington Consensus*. Documento presentado para el debate organizado por la Fundación CIDOB acerca del Consenso de Washington y la gobernanza global; Barcelona; 24-25 oct. 2004. Traducción del autor. En línea en: <http://www.iie.com/publications/papers/williamson0904-2.pdf>. Consulta: 17 Nov. 2010.